

México entre la propaganda del desarrollo y la dependencia estructural.

Plan México y T-MEC: el nuevo ropaje de una vieja subordinación

Por Luis Eugenio Parés Sevilla.

Mientras el gobierno promete modernización, inversión y soberanía, evita tocar la concentración de la riqueza, rehúye una reforma fiscal progresiva y sigue relegando a la economía social. El resultado puede ser una nueva fase del mismo modelo, un crecimiento sin redistribución, sin integración sin autonomía y construye prosperidad para arriba con precariedad para abajo.

México está siendo empujado e inducido a creer en una nueva escenografía del desarrollo. Se le dice que ahora sí viene la gran reorganización productiva del país, que el Plan México abrirá una etapa de industrialización, empleo, inversión y fortalecimiento nacional, y que el T-MEC seguirá siendo la plataforma estable que garantice el acceso a mercados, la confianza de los inversionistas y la inserción ventajosa de la economía mexicana en América del Norte. Todo está cuidadosamente envuelto en un lenguaje de modernidad, certidumbre y oportunidad histórica. Todo parece diseñado para transmitir la idea de que, por fin, el país ha encontrado una ruta clara hacia el futuro.

Pero debajo del alegato verbal para disfrazar el fondo de este tema hay una realidad mucho más cruda, México puede estar entrando no a una nueva etapa de emancipación económica, sino a una versión más sofisticada, más vistosa y más disciplinada de su dependencia histórica.

Ésa es la discusión de fondo. No es, si el país debe crecer. No es, si necesita industria. No es, si requiere integrarse al comercio regional. Todo eso es evidente. Lo que está en disputa es otra cosa, es definir quién controla el crecimiento, quién se apropia de la riqueza, quién decide las prioridades de la producción y quién paga realmente el costo de sostener el país. Y en ese terreno, el discurso oficial empieza a desmoronarse.

El Plan México, presentado como hoja de ruta para la prosperidad nacional, tiene un defecto de origen que contamina todo lo demás, quiere hablar de transformación sin tocar la estructura real del privilegio económico. Quiere ofrecer un nuevo relato de desarrollo sin modificar a fondo la lógica que ha permitido durante décadas que unos cuantos concentren riqueza, poder y capacidad de decisión, mientras la mayoría permanece reducida al papel de fuerza de trabajo, proveedora de materias primas o beneficiaria tardía de políticas compensatorias.

Eso significa que no estamos ante una ruptura clara con el pasado. Estamos, más bien, frente al intento de administrar la vieja desigualdad con un lenguaje nuevo.

Porque no hay que dejarse distraer por los anuncios. No existe proyecto nacional serio sin recursos públicos suficientes. No hay industrialización robusta sin inversión estatal sostenida. No hay infraestructura estratégica, política tecnológica, seguridad alimentaria, proveeduría nacional, innovación ni transformación territorial de fondo si el Estado no tiene una base fiscal capaz de sostenerlas. Y ahí está una de las grandes verdades que el discurso triunfalista se niega a mirar de frente, México sigue cobrando poco, y sobre todo sigue cobrando mal a quienes más tienen.

Ésta es una de las cobardías más persistentes de la política económica mexicana. Se habla del bienestar del pueblo, pero se evita incomodar a las grandes fortunas nacionales hechas del remate de bienes de la nación en 1992 por Salinas y de las transnacionales que a partir de esa fecha con la firma del T-MEC recibieron concesiones para extraer y expoliar la riqueza del país si retribuir estos daños. Se condena la pobreza, pero no se toca con decisión la concentración obscena de riqueza. Se convocan inversiones multimillonarias, pero no se establece una política seria para que quienes más se han beneficiado de la riqueza nacional aporten proporcionalmente más al financiamiento del futuro colectivo.

Y esto no es una demanda extremista ni una consigna vacía. Es sentido de justicia. Es el sentido republicano. Es defensa elemental de la nación. Porque buena parte de las fortunas extremas que se han acumulado en México no cayeron del cielo ni surgieron en un vacío meritocrático. Se construyeron sobre recursos públicos, concesiones, infraestructura financiada por todos, acceso privilegiado a mercados, rentas monopólicas,

explotación laboral, debilidad regulatoria, privatizaciones ventajosas o apropiación intensiva de bienes nacionales. Por eso resulta moral y políticamente inadmisibles que se quiera levantar un nuevo ciclo de desarrollo sin exigir una contribución estructuralmente mayor a quienes más han extraído recursos y riquezas del país.

No hay transformación posible mientras el Estado siga actuando con timidez frente a los grandes intereses económicos. No hay proyecto nacional viable mientras se siga considerando intocable la riqueza concentrada de las élites. Y no hay honestidad política en un discurso que promete cambio profundo, pero se niega a abrir la discusión sobre quién debe pagar realmente la reconstrucción productiva del país.

Pero el problema no termina ahí. Hay una omisión todavía más grave, porque afecta directamente el tipo de nación que México puede llegar a ser, la persistente relegación de la economía social.

Durante décadas, el sector social de la economía ha sido tratado como si fuera una nota al pie del modelo económico mexicano. Se le tolera, se le menciona en discursos, se le cita en leyes, se le integra de manera secundaria en programas públicos, pero no se le reconoce en los hechos como una pieza estratégica de desarrollo. Ésta ha sido una de las más grandes miopías del Estado mexicano.

Se sigue pensando que el desarrollo “real” depende de grandes capitales, grandes plantas, grandes inversiones, grandes corredores logísticos, grandes acuerdos comerciales y grandes corporaciones. En cambio, cooperativas, ejidos organizados, empresas de trabajadores, agroindustrias comunitarias, redes de consumo popular, cajas de ahorro, empresas sociales de transformación o sistemas territoriales de producción son vistos como experiencias limitadas, de pequeña escala o relevancia menor. Ese prejuicio ha hecho daño histórico. Porque justamente ahí, en esa economía social despreciada por tecnócratas y subestimada por burócratas, se encuentra una de las principales reservas de soberanía productiva, cohesión territorial y redistribución real del poder económico.

La diferencia es profunda. El gran capital puede invertir, sí; pero también puede retirarse, especular, reubicarse o imponer condiciones. Las comunidades no. Los ejidos no. Las cooperativas arraigadas en el territorio no. Las empresas de trabajadores no. La economía social tiene una

capacidad que el capital extractivo jamás tendrá, arraigar la riqueza en los lugares donde se produce y convertir a la población en sujeto económico, no en simple mano de obra descartable.

Por eso es tan grave que el Plan México siga sin colocar al sector social de la economía en el centro de la estrategia nacional. Porque mientras eso no ocurra, la historia se repetirá, el país crecerá donde convenga al capital, no donde convenga a la nación. Se invertirá donde haya mayor rentabilidad privada, no donde haga más falta reconstrucción social. Se fortalecerán cadenas de acumulación hacia arriba, mientras abajo se administran carencias, subsidios y promesas.

Y ése es el verdadero rostro del modelo que se quiere vender como modernización. Se moderniza la forma del discurso, pero no se democratiza la propiedad. Se actualiza la narrativa, pero no se distribuyen medios de producción. Se habla de futuro, pero se mantiene intacto el viejo mecanismo de concentración.

Ésta es justamente la pieza que conecta al Plan México con el otro gran pilar del relato económico contemporáneo: el T-MEC.

Aquí también conviene despojar al debate de toda ingenuidad. El T-MEC no es simplemente un acuerdo comercial. No es una herramienta neutra para vender más. No es un mecanismo técnico desligado de la política. Es una arquitectura de poder regional es un documento de gobierno transnacional. Establece reglas, fija condicionamientos, acota márgenes de decisión y ordena la relación económica de México con la mayor potencia del continente bajo una correlación de fuerzas profundamente asimétrica.

Por supuesto que el tratado ofrece ventajas. Sería absurdo negarlo. Asegura acceso preferencial a un mercado enorme, permite continuidad exportadora y da certidumbre a cadenas manufactureras que se han vuelto centrales para la economía mexicana. Pero el punto decisivo no es si el tratado tiene utilidades. El punto decisivo es para qué proyecto nacional sirve y bajo qué condiciones se participa en él.

Porque México puede exportar muchísimo y seguir siendo débil. Puede ensamblar más y seguir siendo dependiente. Puede atraer plantas y seguir importando tecnología, patentes, decisiones estratégicas y valor capturado. Puede convertirse en nodo clave de América del Norte y al

mismo tiempo permanecer atado a salarios deprimidos, proveeduría nacional insuficiente y subordinación tecnológica.

Éste ha sido uno de los engaños más persistentes del libre comercio en México, hacer creer que exportar mucho equivale automáticamente a desarrollarse. **No es verdad.** Un país no se desarrolla cuando sólo mueve mercancías. Se desarrolla cuando fortalece su base interna de producción, retiene valor, construye tecnología propia, democratiza propiedad, sostiene empleo digno y asegura capacidad para producir lo esencial sin quedar sometido a decisiones ajenas.

Y en ese terreno, el T-MEC puede convertirse en una trampa si México entra en él sin proyecto propio. Porque Estados Unidos no negocia con romanticismo regional. Negocia con interés nacional. Rediseña cadenas productivas en función de su seguridad económica. Endurece reglas según su conveniencia industrial. Usa el comercio como herramienta geopolítica. Y frente a eso, México corre el riesgo de llegar una vez más como socio útil, pero no como socio fuerte; como territorio funcional, pero no como nación con poder propio.

Eso tiene consecuencias concretas. Significa que la economía mexicana puede quedar aún más alineada a prioridades estratégicas definidas fuera del país. Significa que la aparente estabilidad del tratado puede ocultar una dependencia todavía más profunda del ciclo político y económico estadounidense. Significa que, mientras aquí se habla de soberanía, en la práctica se acepta una integración donde el margen real de decisión mexicana se estrecha cada vez que chocan los intereses nacionales con las exigencias regionales.

Ésa es la paradoja brutal del momento actual: se invoca el desarrollo nacional para justificar una estrategia que puede debilitar la autonomía nacional. Se invoca el futuro para blindar la subordinación. Se invoca el bienestar del pueblo mientras se refuerzan mecanismos que, si no se corrigen, dejarán intacto el viejo patrón, riqueza concentrada arriba, territorio funcional para cadenas externas, trabajo precarizado abajo y un Estado demasiado débil para alterar de fondo la ecuación. Y todo esto sin consultar al pueblo de México.

Por eso el problema no es sólo económico. Es político. Es moral. Es histórico.

México está frente a una disyuntiva que no puede seguir disfrazándose con propaganda. O construye un proyecto nacional que coloque en el centro la justicia fiscal, la economía social, la soberanía alimentaria, la política industrial propia, la innovación nacional y la democratización de los medios de producción; o seguirá atrapado en una modernización subordinada, donde cada nuevo plan se presenta como ruptura, pero en realidad sólo actualiza el mecanismo de dependencia.

Lo que hoy se necesita no es un nuevo catálogo de anuncios, ni una sucesión de inversiones celebradas en conferencias mañaneras, ni una repetición automática del credo exportador. Lo que México necesita es una decisión política de fondo.

Necesita una reforma fiscal progresiva real que haga pagar más a quienes más han acumulado. Necesita usar al Estado para dotar de maquinaria, infraestructura, transformación, logística, crédito y mercado al sector social. Necesita una estrategia nacional de soberanía alimentaria que deje de tratar la producción de alimentos como asunto secundario. Necesita política industrial activa y no sólo confianza en la derrama del capital. Necesita evaluar cada medida económica según una pregunta esencial, ¿cuánto fortalece la soberanía nacional? y ¿cuánto distribuye el poder productivo entre las mayorías?.

Ésta debería ser la medida a usar. No, cuántos anuncios se hacen. No, cuántos discursos se pronuncian. No, cuántos inversionistas sonrían en una foto. **Sino cuánto cambia realmente la estructura del poder económico en México.**

Porque ahí está la verdad que ya no puede seguir ocultándose, sin justicia fiscal, sin economía social al centro y sin soberanía productiva, el Plan México y el T-MEC pueden terminar funcionando como el nuevo ropaje de una vieja subordinación.

Y el país ya no está para seguir aplaudiendo disfraces. Está para exigir definiciones.

La discusión sobre el T-MEC suele reducirse a la manufactura, a la inversión y a los flujos comerciales. Pero ésa es una visión incompleta.

En un mundo de conflictos geopolíticos, choques logísticos, crisis climática, volatilidad energética y tensiones comerciales, la verdadera pregunta es si un tratado fortalece o debilita la capacidad de un país para sostener su vida económica fundamental. Es decir: alimentar a su población, garantizar energía, producir medicamentos, sostener empleo territorial y resistir la presión externa.

Desde esta perspectiva, México comete un error gravísimo si discute el T-MEC sin poner en la mesa tres temas centrales:

Seguridad alimentaria.

Si el país no fortalece su base productiva agroalimentaria, la integración comercial puede terminar profundizando dependencias peligrosas.

Energía e insumos estratégicos.

Sin una política energética sólida y suficiente, México seguirá siendo un socio útil pero vulnerable.

Economía social como red de resistencia nacional.

Sin cooperativas fuertes, agroindustrias comunitarias, redes de distribución territorial y empresas de trabajadores, el país seguirá concentrando su capacidad económica en pocos actores y quedará más expuesto a sucesos externos.

Por eso la discusión del T-MEC no debería darse sólo entre abogados comerciales, tecnócratas y grandes empresarios. Debería involucrar a productores, cooperativas, universidades, comunidades, trabajadores y tomadores de decisión con visión de Estado. **Debe hacerse una consulta pública nacional.**

La salida no pasa por el aislamiento ni por la retórica vacía. Pasa por un viraje de Estado.

Primero, una reforma fiscal progresiva que grave de manera firme a las grandes fortunas expoliadoras de la riqueza nacional, a las ganancias extraordinarias derivadas de actividades extractivas y a las posiciones dominantes de mercado.

Segundo, la creación de un gran fondo nacional de medios de producción para cooperativas, ejidos, empresas de trabajadores y redes territoriales de economía social.

Tercero, una política obligatoria de compras públicas al sector social y a la proveeduría nacional, para usar el gasto del Estado como motor de mercado interno y arraigo productivo.

Cuarto, una estrategia nacional de soberanía alimentaria, con agroindustrialización regional, almacenamiento, distribución y transformación de productos básicos.

Quinto, una política industrial activa vinculada a ciencia, tecnología, formación técnica, innovación propia y sustitución estratégica de importaciones.

Sexto, una revisión permanente y consulta popular antes de firmar el T-MEC con una visión desde el interés nacional mexicano, midiendo no sólo exportaciones, sino dependencia, contenido nacional, transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades internas.

México no necesita otra puesta en escena del desarrollo. Necesita desarrollo real. No necesita más crecimiento sin redistribución, ni más integración sin autonomía, ni más discursos donde el pueblo es invocado, pero nunca empoderado.

Sin reforma fiscal, sin economía social y sin poder productivo para el pueblo, cualquier plan corre el riesgo de beneficiar más al gran capital que a la nación.

La hora exige una definición clara, o se sigue modernizando la dependencia, o se empieza de una vez a construir independencia económica y soberanía nacional.

La verdadera pregunta no es si México debe relacionarse con Norteamérica. Ya lo hace y lo seguirá haciendo. La pregunta es si lo hará como territorio de mano de obra, ensamblaje y obediencia regulatoria, o como nación que usa la integración para fortalecer su propia soberanía productiva. Si el T-MEC sirve para lo primero, profundizará la dependencia.

Si se subordina a un proyecto de industrialización nacional con justicia fiscal y economía social fuerte, podría ser útil. La diferencia no está en la firma, sino en el país que México decida construir antes de firmar.

Ha llegado la hora de escoger: o se sigue apostando a que unos cuantos capitales ordenen el destino del país, o se construye una economía con base social, productiva, fiscalmente justa y soberana.

Sin justicia fiscal, sin medios de producción para el pueblo y sin economía social al centro, el Plan México puede terminar siendo otra gran promesa que moderniza el escaparate, pero no libera a la nación.

Porque una nación no se libera cuando atrae capital o firma tratados. Se libera cuando democratiza la riqueza, distribuye medios de producción y recupera la capacidad de decidir su destino sin arrodillarse ante sus oligarquías internas ni ante los poderes externos.

**Y en este momento, por el bien de México,
“Primero los pobres”,
“Con el pueblo todo y sin el pueblo nada”.
Ya no se admite más simulación.**